

Nueva **A**ntropología **25**

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

PRESENTE Y FUTURO ELECTORAL

SILVIA GOMEZ TAGLE, Estado y Reforma Política en México: interpretaciones alternativas * EDUARDO IBARRA, Evaluación de las elecciones locales durante 1980 * MOISES JAIME BAILON, Elecciones locales en Oaxaca en 1980 * JORGE ORLANDO ESPIRITU, Evaluación de las elecciones locales durante 1983 * JESUS TAPIA, Elecciones locales en Michoacán en 1983 * CARLOS PEREYRA, Reflexiones sobre algunos aspectos electorales * OCTAVIO RODRIGUEZ ARAUJO, Temas electorales recientes * ELKE KOPEN, Bibliografía electoral * Otros. Documentos.

Temas electorales recientes

Octavio Rodríguez Araujo

Una de las expresiones de la lucha de clases es, a pesar de las deformaciones que sufre en México, el proceso electoral. Esto no quiere decir, por supuesto, que las elecciones sean una copia fiel de la realidad, pues intervienen otros factores que explican tal o cual comportamiento del electorado. Si en los países capitalistas avanzados se puede juzgar con mayor nitidez la tendencia de los ciudadanos mediante el seguimiento y el desarrollo de la acción electoral de los partidos, en México ello es muy difícil toda vez que se impide, desde las oficinas gubernamentales, la celebración democrática y limpia de las elecciones. De aquí que éstas, que son una prueba de fuerza legal y conquista elemental de la democracia burguesa,

no tienen en nuestro país la misma connotación que en otros —Argentina entre esos otros—, para no hablar sólo de países desarrollados. Aquí nunca sabemos, a ciencia cierta, cuántos votos obtienen los partidos (compárense, para el efecto, los resultados registrados en el desaparecido tomo IX de *Reforma política, gaceta informativa de la Comisión Federal Electoral* con los registros del tomo X, digamos la p. 220 del IX y la 121 del X, porcentajes, para tener una idea de cómo, en la misma información oficial, de idéntica fuente, los datos no coinciden).

El fraude electoral se ha convertido en moneda de uso corriente y poco nos sorprendemos de que así sea. Si la tentación autoritaria y la voca-

ción antidemocrática han sido tendencia del régimen político mexicano, tendencia que varía en intensidad según las fuerzas en pugna, ahora adquieren especial relieve por la situación del país y por la existencia, embrionaria en muchos casos, de movimientos de masas que actúan abierta o soterradamente.

La reforma política, que había pretendido en su tiempo canalizar el descontento popular por la vía de las opciones parlamentarias y legales, se ha estancado si no es que está en franco retroceso. Así se demuestra con los actos tecnoburocráticos, para los cuales la pluralidad o el respeto del voto parecen ser un lujo inadmisibles. Y es que la austeridad, para poderse imponer crudamente, tiene que pasar por una creciente restricción a las libertades democráticas, particularmente cuando el deterioro del sistema político en su conjunto es cada vez más evidente para más personas.

El fraude electoral representa, valga la obviedad, un atentado a una de las libertades democráticas elementales. Después de la experiencia al parecer traumática —para el PRI— del reconocimiento de los triunfos del PAN en Chihuahua y Durango en las elecciones del 3 de julio de 1983, y por el temor a un efecto multiplicador de esos triunfos, el gobierno no estuvo dispuesto, y no está para las elecciones en siete entidades federativas en 1984, a respetar la voluntad popular. No dicen otra cosa los indicadores recientes, de 1983, en las elecciones habidas en

15 estados de la república, particularmente en Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Baja California Sur.

El efecto despolitizador de esta práctica fraudulenta es evidente. Pero no sólo eso. Es una práctica tonta. Recuérdese que no sólo los partidos de izquierda, el PRT y el PSUM, han sido objeto de fraudes. También lo ha sido el PAN, y quizá en mayor medida por el hecho de ser el partido más grande y de mayor experiencia electoral, después del PRI. Muchos mexicanos han estado haciendo uso del llamado voto útil, sufragando precisamente por el partido que cuenta con mayores posibilidades electorales de ganarle, teóricamente y algún día, al PRI, sin considerar ideología ni programa. El voto en algunos casos masivo por el PAN no es por un programa capitalista o proimperialista, tampoco por una inclinación derechista o reaccionaria, como pretenden verlo el gobierno y sus corifeos. Hay una contradicción empírica: grandes sectores de masas pueden votar por un partido de derecha extrema, como el PAN, que promueve al igual que el PRI la austeridad de esas masas, y, al mismo tiempo, oponerse a la austeridad aplicada por el gobierno. Por lo cual, paradójicamente, el fraude electoral implantado a gran escala prohija un proyecto de prestigio político (y electoral) para el PAN, asunto que debiera preocupar hondamente, en la perspectiva proletaria y popular.

Los logros panistas tendrán, tarde o temprano, repercusiones de

efecto demostración para quienes han abrazado la falsa ilusión consistente en creer que el bipartidismo es, de acuerdo con el modelo estadounidense (y también británico, colombiano y de otros países), el arreglo partidario más democrático. Quienes así piensan pasan por alto que en los países donde dominan dos partidos, ambos representan exclusivamente opciones burguesas que, para camuflarse, tienden a convertirse en lo que Kirchheimer ha denominado "partidos de todo el mundo" (en clara alusión al Estado que se presenta como representante del interés general, "de todo el mundo", para ocultar su naturaleza de clase), es decir organizaciones relajadas, pragmáticas y típicamente electorales de defensa de los sectores dominantes de la clase dominante cuyas diferencias no son tan grandes como para arriesgar su permanencia en favor de sus dominados, pero que, sin embargo, pretenden hacer creer que todos, ecuménicamente, caben en ellos.

El bipartidismo tiende a confundir a amplios sectores de población haciéndoles creer que si un gobierno no resulta ser lo que esperaban, el otro, el que le suceda, podrá mejorar el estado de cosas. Esta ideología, paradójicamente, ha sido ya encrasada en México gracias al viejo y gastado monopolio partidario desde 1929: los cambios de gobierno (sexenales a partir de 1934) han abonado la idea pendular de que el nuevo presidente (gobierno presidencialista al fin) podrá

mejorar las condiciones de vida que el saliente no atendió o que, por una política equivocada (voluntarismo político), deterioró todavía más de lo que estaban. Qué mejor que sea no sólo otro gobernante sino además, de otro partido. El bipartidismo, entendido así (y las antiguas experiencias en otros países no permiten entenderlo de otra manera), termina por despolitizar a buena parte de las masas y a reducir a los verdaderos partidos de oposición (oposición de clase, por supuesto) a ser minorías permanentes a la zaga de cualquiera de los partidos dominantes.

El Partido Revolucionario Institucional no es, en sí mismo, mejor opción que el PAN. Al partido gubernamental y a su anquilosamiento frente a las nuevas realidades, se debe en alto grado el analfabetismo político que permite ahora (y a partir de ahora si nada cambia sustancialmente) que miles de ciudadanos vean en el PAN una alternativa sin percatarse que, como opción también burguesa, no es mejor que el PRI, aunque no deja de reconocerse que, como opción electoral, el anhelado por muchos triunfo del PAN redundaría, teóricamente, en la quiebra, en la división, y quizá en el enfrentamiento de las diversas facciones de la clase dominante. Los revolucionarios, no debería olvidarse, saben que los cambios sociales convenientes a sus intereses de clase no habrán de lograrse por la vía electoral. Empero, el voto útil de amplios sectores de masas que sufragan por el PAN, po-

dría conducir al repunte del bipartidismo, con los riesgos ya anotados tanto para dominadores y gobernantes como para dominados y gobernados. Por contraparte, sectores de la izquierda y algunas direcciones sectarias también han tenido algo que ver con esta paradoja. Por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua núcleos importantes numéricamente se abstuvieron de votar porque las elecciones son reformistas. Sí lo son en las condiciones actuales del país, pero la abstención, debería ya ser claro para todos, favorece en todos los casos a los defensores del statu quo, salvo que fuera realmente *masiva y deliberada*, como una especie de huelga electoral, pero de toda la oposición, de derecha y de izquierda, al PRI. No es viendo cómo se fortalece la clase dominante como se crean las condiciones subjetivas para la supuestamente anhelada revolución socialista. Toda revolución ha sido precedida por una crisis en el seno de la clase dominante. En la lógica de las fuerzas revolucionarias, por lo tanto, no debería estar el fortalecimiento de la clase contra la que luchan; y el bipartidismo, ante un PRI crecientemente cansado y obsoleto, favorece a la burguesía, aunque por ahora parezca sinónimo de enfrentamiento. El caso más elocuente sería quizá el de Sonora. Sectores y grupos de la burguesía están pasándose al PAN ateniéndose a la vieja máxima de "si el PRI no lo puede hacer, que lo haga el PAN", aludiendo a que el PRI no ha tenido suficiente capacidad

para socavar los movimientos de masas en esa entidad. En Sonora nadie duda que los candidatos del PAN, o del PRI, triunfan cuando es la burguesía la que los apoya. Para la burguesía esto no es asunto ideológico, ya que en este estado no hubo dependencia directa y estructural del porfirismo y nunca existió realmente una derecha promotora de, digamos, la guerra cristera. Por el contrario, la burguesía sonorenses es un engendro legítimo y predilecto de la acción estatal posrevolucionaria. De este modo parece que el PAN sería, más que un partido para canalizar la acción de los empresarios, como suponían sus fundadores, un partido en manos de los empresarios en donde cualquier fantasía populista estaría cada vez más ausente en su discurso político. (No podría pasarse por alto que el actual gobierno priísta de Sonora ha corrido la frontera de Estados Unidos hasta Hermosillo, al darle todas las facilidades a la Ford Motor Co. para que produzca automóviles para uso de los norteamericanos en su país).

De lo anterior no debe desprenderse que los priístas estén interesados en fomentar ahora el bipartidismo. Una cosa es que a la larga les pudiera convenir, como copartícipes de los intereses de la clase dominante, que el bipartidismo se imponga como mal menor a la vez que una posible garantía de permanencia del statu quo, y otra muy distinta es que por ahora se den por derrotados y que acepten su incapacidad potencial para poder manejar la

estabilidad mediante el viejo expediente —entre otros igualmente antiguos— de la aplanadora electoral de su partido.

Es quizá por esto que después de las derrotas priístas en Chihuahua y en Durango se haya dado un giro significativo en la orientación del respeto al voto. Si en esas elecciones se reconocieron algunos triunfos del PAN, no hay duda de que inmediatamente el gobierno corrigió su actitud al respecto al cobrar conciencia de que, por ese camino, al abrir la válvula del desahogo electoral, también se daba cauce al descontento y al sentimiento antipriísta de amplios sectores de masas. En otros términos, a pesar del reconocimiento de triunfos electorales a la oposición, especialmente al PAN, que bien podrían haber introducido ilusiones en las masas sobre la posibilidad de cambios por esa vía, y las ilusiones relativas al bipartidismo, el gobierno echó marcha atrás y ha preferido recorrer el camino más conocido: a ganar a como dé lugar.

En Baja California se demostró lo anterior escandalosamente, ya que en este estado pudo haberse manifestado un buen número de derrotas priístas. Luego, con la experiencia bajacaliforniana, se prepararon operativos similares para las elecciones de Sinaloa y de Baja California Sur, en las que la izquierda psumista y perretista, respectivamente, tenían buenas posibilidades de triunfos parciales. Ni qué decir de los escamoteos de votos en Copalillo, en Juchitán y en Tlaxiaco, pa-

ra mencionar sólo los ejemplos más evidentes y más conocidos.

En el caso de las elecciones de Baja California Sur el PRI contó a su favor, y para evitar que el PRT se mantuviera como la tercera fuerza electoral del estado, con la complicidad del PSUM local. Conviene recordar que el diputado local de este partido, Manuel Ortiz M., metió un autogol a la izquierda para favorecer al PRI, eventualmente a su partido y perjudicar potencialmente al PRT. Inusitadamente, una iniciativa de ley presentada por Ortiz fue aprobada por la Cámara del estado dominada por el PRI. El PSUM, aunque luego no haya hecho suya tal iniciativa, como pudo leerse en *Así es*, número 62, propuso que el porcentaje mínimo a obtener en las elecciones locales para tener derecho a diputados de representación proporcional se subiera de 3 a 5 por ciento. Por supuesto, el PRI apoyó de inmediato la iniciativa y ésta fue aprobada. Contra el criterio establecido por la LOPPE, la ley correspondiente a Baja California Sur exigió, en 1979, en vez de 1.5 por ciento, un mínimo de 3 por ciento del total de los votos para que un partido pudiera llevar a la Cámara representantes por proporcionalidad. El argumento que se dio entonces, centrado en la densidad poblacional, fue tramposo, pues la ley federal se guía por un criterio porcentual, independientemente del número absoluto de votantes. Con la iniciativa del PSUM-PRI la ley electoral local se hizo más restrictiva. La enmienda

aprobada se salió de los marcos no sólo de la LOPPE, sino también de lo que debiera ser la lógica de la izquierda aunque luego, a toro pasado, el PSUM haya descalificado el hecho. Uno de los orígenes de esa contradicción, como se recordará, se encontraba en la presencia en esa entidad del PRT. Este obtuvo en las elecciones federales de 1982 el tercer lugar, después del PRI y del PAN, con más del 3 por ciento de los votos totales. El PSUM, en cambio, tuvo menor porcentaje de votos a su favor. Sin embargo, la iniciativa de enmienda a la ley electoral local significó un acuerdo de los psumistas locales con el PRI, como lo demostraría el inflado número de votos obtenidos por los candidatos de los exmiembros del Partido del Pueblo Mexicano que en Baja California Sur están más cercanos al PPS que al antiguo PCM cuyos exmiembros, dicho sea de paso, han sido excluidos del PSUM local por los lombardistas que lo dominan.

Este ejemplo ilustra, como también el caso de Ensenada donde un priísta triunfó bajo el emblema del PST, que el PRI se vale de todo tipo de alianzas, posibilitadas por la falsa izquierda y sus ambiciones electorales, para triunfar o, al menos, para no perder del todo en favor de organizaciones de oposición revolucionaria. Es evidente que a quien más teme el PRI es a la izquierda. No se ha borrado el recuerdo de la actitud oficial, federal y local, ante los casos en que la izquierda ha arrebatado el reconoci-

miento de sus triunfos electorales en algún municipio: asfixia económica, métodos represivos, provocaciones, hasta llegar, como en el caso más resaltante, el de Juchitán, a la destitución arbitraria y despótica de las autoridades electas democráticamente, y no porque hubiera "ganado" el PSUM, sino porque el pueblo organizado en la COCEI había defendido su triunfo. El golpe fue contra Juchitán (y la COCEI) y no será contra Chihuahua ni Durango ni Ensenada, puesto que el significado político y la movilización de masas presenciada en el Istmo le dan una connotación diferente al de los municipios controlados por la derecha.

La crisis del municipio amenaza al sistema en su conjunto dado que el descontento social, las movilizaciones de masas, los retos al control priísta, las fisuras en el grupo gobernante, se expresan más crudamente en el municipio. Es, por decirlo así, el eslabón más débil de la cadena gubernamental. La tecnoburocracia mexicana, conocedora profunda de su sistema, es la primera en advertir consciente y claramente el papel conflictivo que puede jugar el municipio en la confluencia de la crisis social. Por ello ha estado preparando una estrategia de grandes dimensiones que le permitan posponer brotes y estallidos sociales. El grado del conflicto de las relaciones de poder y control en el ámbito municipal expresan, en el fondo, la reducción de los márgenes de maniobra del partido gubernamental. En la escala

del municipio los grandes proyectos burgueses en el ámbito electoral podrían venirse abajo. Al reducirse el margen de maniobra de los interlocutores priístas tradicionales, por la crisis económica, por el deterioro progresivo de los mecanismos de control, las fricciones y las contradicciones en la esfera gubernamental y priísta aumentarán con rapidez. Por lo cual, probablemente, habrá de imponerse, como ya dijimos, la restricción a las mismas libertades democráticas burguesas que se habían dado hace unos años. Los municipios, por

décadas abandonados a su propia suerte (siempre escasa), son ahora preocupación gubernamental y no precisamente por lo que se refiere a su autonomía burlada desde siempre, sino por lo que representan como peligro de rompimiento del tradicional sistema político mexicano.

De otra manera no sería importante el análisis de las elecciones locales. Nunca antes habían sido importantes. Se sabía que siempre ganaba el PRI, como lo demostraran varios autores hace algunos años. Pero ahora están ocurriendo otros fenómenos.



